



IQTP
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE TRANSPARENCIA
PARA EL PUEBLO

RECURSO DE REVISIÓN.

EXPEDIENTE: RR/0920-26/IQTP

SUJETO OBLIGADO: MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

AUTORIDAD GARANTE ESTATAL: INSTITUTO QUINTANARROENSE DE TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO

PROYECTISTA: DANIEL ALVAREZ SÁNCHEZ.

Chetumal, Quintana Roo a 24 de agosto de 2026¹.

Resolución por la que el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo **REVOCA la respuesta emitida por el MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN** a la solicitud de información con folio **1411288100214026 (Expediente en PNT: MPDC2611745)** por las razones y motivos siguientes:

ÍNDICE

GLOSARIO	2
ANTECEDENTES	2
I. Solicitud	2
II. Trámite del recurso	3
CONSIDERANDOS	5
PRIMERO. Competencia	5
SEGUNDO. Causales de improcedencia	5
TERCERO. Razones o motivos de inconformidad y pruebas	6
CUARTO. Estudio de fondo	7
QUINTO. Orden y cumplimiento	10
RESUELVE	11

¹ Todas las fechas corresponden al año 2026, salvo mención de lo contrario.

Eliminado: 1-1 por contener: NOMBRE en términos de lo dispuesto en los artículos 40 fracción II, 115 de la LGTAIP; artículos 122, 127, 128 Y 129 LTAIPQROO; los numerales Trigésimo octavo, Quincuagésimo sexto, el sexagésimo y sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas y al acuerdo IQTP/UTAIPDP/06-02/X/2026 de la sexta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del IQTP.

GLOSARIO

Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Instituto / Autoridad Garante Estatal	Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo.
Ley de Transparencia	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Plataforma / PNT	Plataforma Nacional de Transparencia
Recurso	Recurso de Revisión con número de Expediente RR/0920-26/IQTP
Sujeto Obligado	Municipio de Playa del Carmen.
Parte Recurrente	1
Buzón SICOM	Buzón de Comunicación entre Autoridades Garantes y Sujetos Obligados.

De las constancias obrantes en el expediente, así como de la narración de los hechos formulados en el presente recurso de revisión, se advierten los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Solicitud.

I.1 Presentación de la solicitud. En fecha 05 de mayo, la parte recurrente presentó, vía *Plataforma Nacional de Transparencia*, solicitud de información ante el **Sujeto Obligado**, requiriendo lo siguiente:

"Por medio de la presente, y con el debido respeto, me permito solicitar se me proporcione la información y documentación correspondiente a la Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, relativa al ejercicio fiscal 2026, consistente en lo siguiente: Copias de los acuerdos emitidos por la Comisión durante el periodo señalado. Copias de las minutas de las sesiones ordinarias celebradas. Copias de las minutas de las sesiones extraordinarias, en caso de haberse llevado a cabo. Copias de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Copia del programa de trabajo de la Comisión. Copia del calendario de sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias." (sic).

I.2 Respuesta. Mediante oficio número **MPDC/PM/UVTAIP/3460/2026**, de fecha 13 de mayo, la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Sujeto Obligado, dio contestación a las solicitudes de información, en los términos sustanciales siguientes:

"... se procede a dar respuesta a su solicitud con información proporcionada por la Décima Tercera Regiduría del H. Ayuntamiento de Playa del Carmen, Quintana Roo, de este Sujeto Obligado, mismo que se anexa al presente..."

Oficio MPDC/R-13/0123/2026:

La documentación solicitada obra en los archivos físicos y administrativos de esta Comisión Edilicia, integrada por diversos expedientes y documentación generada con motivo del desarrollo de sus actividades colegiadas durante el periodo referido. En ese sentido, y con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública en términos de la normativa aplicable, se hace del conocimiento que la información podrá ser consultada de manera directa en las oficinas de esta Regiduría, previa cita y coordinación administrativa correspondiente, a efecto de facilitar su adecuada localización, organización y acceso..." (sic).

I.3 Interposición del recurso de revisión. El 27 de mayo, la parte ahora recurrente presentó recurso de revisión, el cual se tuvo por interpuesto en esa misma fecha, en el que señaló como acto que se recurre y como puntos petitorios, esencialmente lo siguiente:

"Causa agravio la respuesta emitida por la autoridad responsable, al no acreditar ni justificar debidamente las causales que sustentan la modalidad de consulta directa de la información solicitada, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. Lo anterior, toda vez que el cambio de modalidad de entrega de la información constituye un acto que debe encontrarse debidamente fundado y motivado, expresando las razones particulares y las circunstancias específicas que lo justifican, lo cual en el presente caso no acontece, ya que la autoridad únicamente se limita a señalar de forma genérica que la información obra en sus oficinas." ... (Sic)

II. Trámite del recurso de revisión.

II.1 Radicación y Turno. De conformidad a los artículos 35, fracción II, 155, 156, 157 y 158 de la Ley de Transparencia, así como las demás disposiciones aplicables, mediante acuerdo de fecha 01 de junio, se radicó el presente recurso de revisión,

asignándole el número **RR/0920-26/IQTP**, remitiéndose al proyectista el presente expediente con la finalidad de poner el proceso en estado de resolución.

II.2 Admisión. Mediante acuerdo de fecha 29 de junio, se admitió el recurso de revisión a trámite, ordenándose emplazar al *Sujeto Obligado* en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 164 de la *Ley de Transparencia*. Apercibiéndole que, de no contestar, se tendrían por ciertos los hechos denunciados por la parte recurrente.

II.3 Contestación del Sujeto Obligado. El día 07 de julio, se tuvo por recepcionado, vía Buzón SICOM, el oficio número MPDC/PM/UVTAIP/5114/2026, de misma fecha, firmado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado recurrido, manifestando sustancialmente lo siguiente:

"... En fecha 13 de mayo de 2026, se le proporciona respuesta a la solicitud de información con número de folio 141128800214026, mediante oficio MPDC/SG/UVTAIP/3460/2026, con la información proporcionada por la Décimo Tercera Regiduría de este Sujeto Obligado, quien hace entrega de su oficio MPDC/HC/R-13/0123/2026, el cual se adjunta al presente, no obstante, tomando en cuenta el dicho del hoy recurrente, sin conceder, a la recepción del presente recurso de revisión, esta Unidad de Transparencia requirió a la misma regiduría de este sujeto obligado que manifestara lo que a su derecho convenga conforme al presente, a lo que esta, contesta el mencionado requerimiento, mediante su oficio MPDC/HC/R-13/0143/2026, el cual se adjunta al presente como respuesta al mismo...

Oficio MPDC/HC/R-13/0143/2026:

... PRIMERO. NO EXISTE NEGATIVA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Resulta infundado el agravio formulado por la parte recurrente al sostener que se vulneró su derecho humano de acceso a la información pública, en ningún momento esta Comisión Edilicia negó el acceso a la información solicitada, tampoco declaró su inexistencia, clasificó la documentación como reservada o confidencial, ni impidió al solicitante conocer su contenido, por el contrario, mediante la respuesta emitida se puso a su disposición la totalidad de la información requerida a través de la modalidad de consulta directa, señalándole expresamente el domicilio donde obra la documentación y proporcionando un número telefónico para agendar la cita correspondiente, en consecuencia, la autoridad garantizó plenamente el acceso a la información solicitada, por lo que resulta jurídicamente incorrecto afirmar que existió una restricción o negativa al ejercicio de dicho derecho..." (sic).

II.4. Fecha de audiencia.

El día 12 de agosto, con fundamento en lo previsto por la fracción VI del artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se emitió el correspondiente Acuerdo para la celebración de la audiencia para el desahogo de pruebas y la presentación de alegatos, de las partes, señalándose las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día 20 de agosto.

II.5. Audiencia y cierre de instrucción.

El día 20 de agosto, con fundamento en lo establecido en las fracciones VI y VII del artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo, en el domicilio oficial de este Instituto, la celebración de la audiencia para el desahogo de pruebas y la presentación de alegatos por las partes, sin haber comparecido a la citada audiencia, ni presencial, ni a través de documento escrito para presentar sus alegatos.

Cabe señalar que, una vez admitidas las probanzas ofertadas por las partes, estas se desahogaron por su propia y especial naturaleza.

En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 164 fracción IX de la Ley de Transparencia, en la referida acta de audiencia, se declaró el cierre de instrucción del presente recurso de revisión.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

El *Instituto*, es competente para conocer y resolver el presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 fracciones IV, V inciso a), 29, 30 fracción I, 32 fracción III, 34, 35 fracción II, y demás relativos aplicables, de la *Ley de Transparencia*. Lo anterior, toda vez que el presente Recurso de Revisión fue presentado en contra de uno de los Sujetos Obligados de los cuales conoce este Instituto en carácter de Autoridad Garante Estatal.

SEGUNDO. Causales de improcedencia.

Este Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión, por considerar que reunía los requisitos previstos en los artículos 157, 158, y 164 fracción IV, todos de la *Ley de Transparencia*.

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, este *Instituto* realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la tesis de jurisprudencia de título **"APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO"**,² emitida por el Poder Judicial de la Federación.

Una vez analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el *sujeto obligado* no hizo valer causal de sobreseimiento o desechamiento alguna, ni este *Instituto* advierte su actualización, motivo por el cual resulta indispensable analizar el fondo del asunto, a efecto de determinar si la respuesta emitida por el *sujeto obligado*, estuvo apegada a derecho o se actualiza, en su caso, el agravio hecho valer por la parte recurrente.

TERCERO. Razones o motivos de inconformidad y Pruebas.

a) Solicitud. Misma que se encuentra transcrita en el Antecedente I.1 de la presente resolución.

b) Respuesta del sujeto obligado. Misma que se encuentra transcrita en el Antecedente I.2 de la presente resolución.

c) Razones o motivos de inconformidad del recurrente. Del análisis al recurso de revisión presentado se observa que el recurrente señala como razón o motivo de inconformidad, la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; lo que actualiza la hipótesis prevista en la fracción VII del artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

d) Pruebas ofrecidas y valoración probatoria. Respecto de las documentales obtenidas y descargadas de la *Plataforma* y del *Buzón SICOM*, es de señalar que estas constancias constituyen documentales públicas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 44 y 45 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 56 fracción II y 77 del Código de

² "Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa.

Procedimientos y Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, todos de aplicación supletoria en la materia, de conformidad al artículo 8 fracción II de la *Ley de Transparencia* y de los Lineamientos de la Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia.

CUARTO. Estudio de fondo.

a) Controversia. Del análisis al recurso de revisión presentado se observa que el recurrente señala como razón o motivo de inconformidad, la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, en tanto que el Sujeto Obligado reitera que el cambio de modalidad en la entrega de la información resulta procedente conforme a derecho.

b) Marco normativo. El artículo 1º de la *Constitución Federal*, establece como fuente de reconocimiento de derechos humanos a la misma carta magna y a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; además, prevé la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, adoptando siempre la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce como principio **pro persona**.

De esta manera, el derecho humano de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en nuestra carta magna que, en la parte que interesa (artículo 6, inciso A), fracción III), establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Mismos principios y bases que recoge nuestra *Constitución Local* en su artículo 21.

Asimismo, en términos del artículo 21 de la *Ley de Transparencia*, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, **Municipios**, Órganos Constitucionales Autónomos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado, son **sujetos obligados** a transparentar y **permitir el acceso a su información** y proteger los datos personales que obren en su poder.

Por tales razones que este *Instituto* analizará la **legalidad de la respuesta emitida y del cambio de modalidad invocado por el Sujeto Obligado**, el cual debe ser acorde a lo dispuesto por la *Ley de Transparencia* y demás disposiciones que resulten aplicables, con el objeto de garantizar que en los actos y resoluciones del Sujeto

Obligado se respeten los principios de transparencia y acceso a la información, protección de los datos personales en su poder y las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Los únicos límites al ejercicio de dicho derecho, que la Ley en comento prevé en sus numerales 119 y 122, es que la información sea considerada como reservada o confidencial.

c) Caso concreto. Del análisis al recurso de revisión presentado se observa que el recurrente señala como razón o motivo de inconformidad, la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, en tanto que el Sujeto Obligado reitera que el cambio de modalidad en la entrega de la información resulta procedente conforme a derecho.



Ahora bien, partiendo de que la solicitud de información versó sobre la obtención de documentación correspondiente a la Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, relativa al ejercicio fiscal 2026, este Instituto advierte que la persona solicitante no formuló un requerimiento genérico, amplio o indeterminado, sino que identificó de manera precisa la documentación requerida. En respuesta, el Municipio recurrido no negó el acceso a la información, no declaró su inexistencia, no manifestó incompetencia, ni sostuvo que el documento actualizara algún supuesto de clasificación previsto en la Ley de la materia; por el contrario, **determinó modificar la modalidad de entrega elegida por la persona solicitante**, al señalar esencialmente que ***“La documentación solicitada obra en los archivos físicos y administrativos de esta Comisión Edilicia, integrada por diversos expedientes y documentación generada con motivo del desarrollo de sus actividades colegiadas durante el periodo referido. En ese sentido, y con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública en términos de la normativa aplicable, se hace del conocimiento que la información podrá ser consultada de manera directa en las oficinas de esta Regiduría, previa cita y coordinación administrativa correspondiente, a efecto de facilitar su adecuada localización, organización y acceso”***. En ese sentido, la propia respuesta permite advertir que el Sujeto Obligado partió de la disponibilidad de la documentación solicitada.

En el caso concreto, se observa que el área administrativa que posee la información requerida, únicamente señala que la información está integrada por diversos expedientes; sin embargo, dicha manifestación no satisface, por sí misma, la carga argumentativa exigida para justificar la procedencia excepcional de la consulta directa, pues el **Artículo 136 de la Ley de Transparencia local** dispone textualmente que: ***“De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el Sujeto Obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de***

documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición de la persona solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada." De la literalidad del precepto se advierte que **la consulta directa opera únicamente como una medida excepcional en aquellos casos que la información requerida sea vasta y sobrepase las capacidades técnicas de la parte recurrida para hacer entrega de esta.**

En tenor anterior, el Municipio recurrido, omitió explicar por qué la reproducción o entrega de **la información requerida**, implicaba análisis, estudio o procesamiento de documentos que sobrepasara sus capacidades técnicas dentro del plazo legal. En efecto, la respuesta impugnada no precisó el número de fojas del documento, su estado físico o electrónico, la dispersión documental entre diversas áreas, la imposibilidad material de reproducción, ni alguna otra circunstancia objetiva que demostrara que la entrega de lo solicitado, en específico resultaba técnicamente inviable en la modalidad requerida.

Asimismo, aun en el supuesto de que el Sujeto Obligado estimara procedente modificar la modalidad originalmente requerida, tenía la carga de justificar de manera particular el impedimento para entregar la información en la forma elegida por la persona solicitante. Robustece lo anterior el **Artículo 142** de la Ley de Transparencia, el cual señala: **"El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por la persona solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá justificar, fundar y motivar el impedimento, y notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega."** En ese sentido, la respuesta impugnada resulta insuficiente, pues el Municipio recurrido únicamente citó a la persona solicitante para acudir a sus oficinas en una fecha y horario determinados, pero no fundó ni motivó el por qué la documentación requerida no podía entregarse por la modalidad de entrega elegida.

Asimismo, la documentación solicitada reviste un marcado interés público, ya que se define en la Ley de Transparencia como aquella que resulta relevante o útil para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación contribuye para que el público conozca y comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y como ejercen los recursos públicos, así como a exigir la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Robustece lo anterior, el artículo 22 de la Ley de Transparencia local establece, en sus fracciones XII y XV, las siguientes obligaciones:

"Artículo 22. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, **los Sujetos Obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones**, según corresponda, de acuerdo con su naturaleza:

XII. Difundir proactivamente la información de interés público;

XV. Promover la digitalización de la información en su posesión y la utilización de las tecnologías de información y comunicación, de conformidad con las políticas que al efecto establezca el Sistema Nacional;"

Por consiguiente, la conservación de documentos exclusivamente en soporte físico constituye una condición de gestión documental atribuible al propio Sujeto Obligado, quien además tiene el deber de promover su digitalización. En tales condiciones, la falta de una versión electrónica no puede traducirse, sin una justificación suficiente, en un cambio de modalidad para hacer entrega de la información requerida, siendo una barrera para la persona que solicita, acceder a la información mediante la modalidad electrónica.

Por lo anteriormente expuesto, este Instituto estima que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no guarda la debida correspondencia entre la naturaleza concreta de la información solicitada y la justificación utilizada para modificar la modalidad de entrega. En consecuencia, al no haberse acreditado de manera fundada, motivada y particularizada el impedimento para entregar la información en la modalidad solicitada, **el agravio relativo a la puesta a disposición de información en una modalidad distinta resulta fundado.**

Es en atención a lo anteriormente razonado y fundado que el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, estima que las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte recurrente resultan **FUNDADOS.**

QUINTO. Orden y cumplimiento.

a) **Efectos.** En atención a lo señalado en el Considerando **CUARTO** de la presente resolución y con fundamento en los artículos 166 fracción III y 167 fracción III de la *Ley de Transparencia*, es que resulta procedente **REVOCAR** las respuestas otorgadas por el *Sujeto Obligado*, **MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, en cuanto al folio 1411288100214026**, por lo tanto, ordenar lo siguiente:

- Se le **ORDENA** al Sujeto Obligado emitir una nueva respuesta, debidamente fundada y motivada, en la que atienda de manera

congruente y exhaustiva la solicitud de información, debiendo hacer entrega de la información requerida en la modalidad elegida por la parte solicitante, es decir, la información correspondiente a la solicitud de información, utilizando los archivos digitales y vínculos existentes, y digitalizando la documentación que únicamente obre en soporte físico.

b) Plazos. En aplicación de los artículos 167, fracción IV y 176 de la *Ley de Transparencia* se concede al *Sujeto Obligado*, a través de su *Titular de la Unidad de Transparencia*, un plazo de **DIEZ DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente *resolución*, para que cumpla con lo ordenado.

Igualmente, se le concede un plazo de **TRES DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente a aquel en que cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, para que remita a este *Instituto*, las constancias que acrediten el cumplimiento de lo ordenado en la presente *resolución*, de conformidad al artículo 177 de la *Ley de Transparencia*.

En caso de incumplimiento a la presente *resolución*, se le aplicará al sujeto obligado antes mencionado una de las medidas de apremio previstas en el artículo 179 de la *Ley de Transparencia*.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, se:

RESUELVE

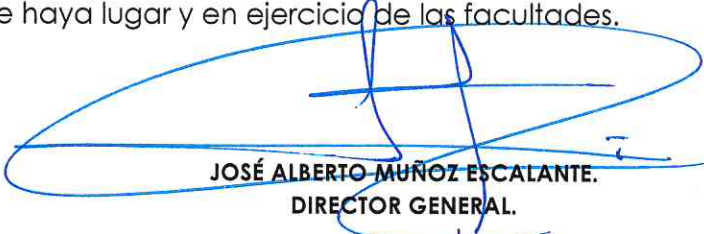
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 166 fracción III y 167 fracción III de la *Ley de Transparencia*, **se REVOCA** la respuesta otorgada por el **MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN** en lo relativo a la solicitud de información con folio 1411288100214026 y se le ordena dar cumplimiento a lo señalado en el **Considerando Quinto** de la presente *resolución*.

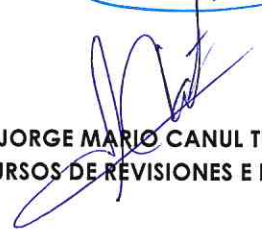
SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la parte *Recurrente* que, en caso de estar inconforme con la presente *resolución*, podrá impugnarla en los términos que se establecen en el artículo 174 de la *Ley de Transparencia*

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 en relación con el 75 fracción XXXIV de la *Ley de Transparencia*, una vez que haya causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspondiente y publíquese; así como archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

CUARTO. Se ordena **NOTIFICAR**, por un lado, al **MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN**, a través del Buzón de Comunicación entre la Autoridad Garante y Sujeto Obligados (SICOM), y por el otro, a **la parte recurrente** a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Asimismo, publíquese en lista electrónica y estrados y **CÚMPLASE**.

Así lo resolvió **José Alberto Muñoz Escalante, Director General del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo**; quien firma el veinticuatro de agosto del año dos mil veintiséis, asistido de Jorge Mario Canul Tuz, Director de Recursos de Revisiones e Inconformidades del propio Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar y en ejercicio de las facultades.


JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE.
DIRECTOR GENERAL.


JORGE MARIO CANUL TUZ.
DIRECTOR DE RECURSOS DE REVISIONES E INCONFORMIDADES.

